
De apetitos e intemperancias

Horizontes de la crisis mexicana



León Bendesky
Roberto González Amador



OCEANO

AVISO

Éste es un ensayo de reflexión sobre el desenvolvimiento de la sociedad mexicana en un periodo especialmente significativo de su historia reciente. En los veinte años transcurridos desde la “crisis de la deuda” en 1982, se manifestó la debilidad económica estructural para el crecimiento sostenido del producto y para el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. Se puso en evidencia, también, el quiebre del espacio político de funcionamiento del Estado, que se expresa en los cambios de la relación entre lo que corresponde a los ámbitos de lo público y lo privado. Los efectos de aquella crisis se advierten, dos décadas después, en las cuestiones de índole productiva y financiera que prevalecen y que no son favorables al proceso de desarrollo. Pero también involucran aspectos centrales de naturaleza institucional y política que traban las posibilidades para acrecentar de modo efectivo y duradero la capacidad de generar mayor riqueza, de crear empleos suficientes e ingresos remuneradores, de establecer una mejor distribución del producto entre los habitantes, de proveer de más y mejores servicios a la población y, en general, de hacer efectiva la mayor participación social en la vida de la nación. En este periodo ocurrieron cambios profundos en la forma del funcionamiento de la economía; se debilitó la estructura social e, igualmente, se advirtió el desgaste del sistema político, de sus viejas estructuras y organizaciones, lo que provocó, al final, una alternancia en el poder después de siete décadas de hegemonía de un partido único. Éste no es un recuento exhaustivo de lo que ha pasado. Se atiende, en cambio, a un conjunto de hechos asociados con la crisis de la deuda externa ocurrida hace veinte años, con la fragilidad financiera que prevalece desde entonces, y sus relaciones en el entramado social del país. México entró en la globalización por la puerta de la deuda externa y el periodo marcado por el inicio de la crisis de 1982 ha puesto al país en una situación de reconstrucción casi permanente de las condiciones de su funcionamiento económico y de su estructura política. Los resultados

son todavía contradictorios e insatisfactorios, y de ellos no se puede hoy avizorar un futuro muy distinto, es decir, mucho mejor. No hay de nuestra parte idea alguna que se asocie con la nostalgia de un pasado que fuera mejor. Éste es un periodo que se caracteriza por la persistente inestabilidad financiera, el deterioro social, el reacomodo institucional y las crisis recurrentes, que se asocian con la ruptura provocada hace dos décadas por el gran endeudamiento externo. Este texto se plantea como un punto de vista acerca del significado que ha tenido una etapa, ya larga, marcada por el estancamiento productivo general con fuertes desigualdades entre los grupos de la población, las actividades económicas y las regiones.

Si no podemos cambiar de país, por lo menos cambiemos de conversación.

James Joyce

1

Era el 17 de agosto de 1982 y había expectación en Washington por el anuncio del secretario mexicano de Hacienda, Jesús Silva-Herzog. En el Departamento del Tesoro y en las oficinas de los directores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ya se sabía que el gobierno mexicano enfrentaba serios problemas financieros por la enorme deuda externa que había acumulado. Silva-Herzog hacía oficial el hecho de que no se podía seguir pagando los intereses y las amortizaciones de los préstamos contratados con los bancos comerciales y ello precipitaría lo que se conoció como la “crisis de la deuda”. Ésta habría de marcar el desenvolvimiento de la economía durante las siguientes dos décadas. Desde entonces, los viajes de los funcionarios de Hacienda a la capital estadounidense se convertirían en rutinarios, primero para renegociar el pago de los intereses, reprogramar los vencimientos y establecer los compromisos para el ajuste de la economía en un estricto esquema de condiciones fijado por los organismos financieros internacionales; luego, para obtener más recursos ante la persistente necesidad de créditos para financiar la fragilidad de la economía que desembocó en las crisis de 1986 y de 1995 y, más recientemente, para mantener la confianza de los empresarios y atraer crecientes flujos de inversiones directas que son, hoy, la fuente esencial de financiamiento de la actividad productiva.

A veces, veinte años pueden no ser nada, como dice el famoso tango de Gardel, pero otras veces es mucho tiempo. Veinte años son

muchos para las personas y las familias que se empobrecen, o que no pueden hacer más con sus trabajos, e incluso con sus vidas, por los efectos de la larga crisis económica de México. Dos décadas es mucho tiempo para los casi veinte millones de jóvenes que han nacido desde 1980 y cuyas expectativas están, en efecto, achatadas, y es ciertamente mucho para una sociedad con menos oportunidades, con un horizonte que se ha venido acortando y que enfrenta diversos conflictos sociales. Por eso no era intrascendente el señalamiento que hizo Ernesto Zedillo en su tercer informe de gobierno, rendido en 1997, con respecto a que si la economía creciera 5% anualmente, se necesitarían veinte años para que se duplicara el ingreso por habitante. La situación era entonces —luego de la debacle de 1995, de la que él mismo fue protagonista irresponsable—, por decir lo menos, lúgubre. Sigue siendo así. No hemos podido cambiar al país, seguimos aquí y tampoco podemos cambiar de conversación, como sugiere el epígrafe de Joyce. El caso es que si se toma como referencia el periodo de 1977 a 1981, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante aumentó en promedio anual 5% y se necesitaban catorce años para duplicar el nivel que tenía entonces, a la tasa registrada en la última década se necesitarían cuarenta años para duplicarlo. El expresidente se quedó corto en su estimación del malestar económico que se ha ido generando en el país durante un largo tiempo. El producto por persona no sólo ha estado prácticamente estancado, sino que la evidencia muestra una mayor concentración del ingreso en el país y con ello más desigualdad. El bienestar que ofreció Zedillo a las familias como lema de su campaña por la presidencia no se consiguió e, incluso, retrocedió con el alto costo generado por la caída de 6% del producto, el alza de 52% en la inflación y la devaluación del peso de 100% registrado en su primer año de gobierno. Con esto heredó una enorme carga financiera, que pesará por muchos años, con el rescate bancario organizado en 1995. El crecimiento de la economía no se ha podido consolidar y sostener de manera duradera; en este sentido, no ha habido cambios significativos en los pasados veinte años, como es visible aun en la experiencia reciente con un gobierno surgido de otro partido por primera vez en siete décadas.

La crisis de 1982 provocó una serie de anomalías en el funcionamiento de la economía. Tal vez la más relevante es la que se expresa en el muy lento crecimiento promedio del producto que se ha registrado en los pasados veinte años y que es de apenas 2.3% en promedio anual. Ésta es una tasa muy reducida para una sociedad con las carencias que existen y con la magnitud de la pobreza y la marginación que prevalecen. Es un crecimiento insuficiente para recuperar y extender las condiciones del bienestar de la población, para ampliar los servicios públicos disponibles y la inversión en infraestructura y vivienda; es muy baja en relación con el aumento tan rápido de la población en este lapso. El largo periodo de estancamiento es hoy un ancla para restablecer un proceso de desarrollo nacional dinámico y generador de suficiente riqueza. Además, ha provocado una creciente desarticulación entre los sectores y en el despliegue territorial de la actividad productiva, lo que va en contra de la consecución de una mayor capacidad competitiva, ya que disminuye la eficiencia general del sistema económico. El objetivo de elevar la competitividad es el sustento de la visión de la política económica y de la gestión del Estado que ha prevalecido, misma que privilegia el funcionamiento libre y abierto de los mercados como cimiento de mayor eficiencia. Las condiciones que se han ido creando no corresponden a ese fin, y ello entraña fuertes contradicciones políticas y técnicas que se manifiestan en un desgaste de la base humana y material de la generación de la riqueza en México. A este entorno se suma uno de los aspectos que aparecen como consecuencia central de la crisis de 1982 y que tiende un eje que recorre el desenvolvimiento de la economía y la sociedad en las dos últimas décadas, a saber: la dislocación del sistema financiero mexicano y, en especial, del sector bancario. Ésta es una condición contraria en los hechos a todos los planteamientos sobre el crecimiento repetidos por los gobiernos que se han sucedido de entonces hasta hoy.